

Región Andina

La cuarta derrota del neoliberalismo en Bolivia

Luis Tapia*

** Coordinador
del Doctorado
Multidisciplinario
del Posgrado en Ciencias
del Desarrollo (CIDES)
de la Universidad Mayor
de San Andrés (UMSA).*

Del dogmatismo neoliberal al reformismo neoliberal

En Bolivia se está viviendo un ciclo largo de crisis política en el seno del estado y del bloque político dominante que expresa también una crisis del modelo neoliberal. Ahora bien, dicha crisis no significa que este modelo no siga funcionando como núcleo organizador de la economía en Bolivia, o que no sigan gobernando miembros del mismo bloque dominante. La crisis ha producido falta de consenso y de estabilidad para dicho bloque y su proyecto.

Hasta octubre de 2003 el dogmatismo neoliberal en persona estaba a la cabeza del gobierno. La posición era no negociar ni reformar nada; se trataba, más bien, de radicalizar el modelo que combinaba privatización y exportación, con la venta del gas por Chile hacia Estados Unidos. Para sostener este proyecto se había dispuesto el despliegue de la represión policial y militar sobre los sectores críticos.

Las movilizaciones populares vencen esta faceta dogmática del neoliberalismo encarnada en Sánchez de Lozada, que a su vez representaba la faz tiránica que este tiende a adoptar en sus momentos de descomposición política. Según Sánchez de Lozada, el referéndum y la asamblea constituyente eran antidemocráticos.

La victoria popular sobre Sánchez de Lozada produce la transición a la faceta reformista del neoliberalismo. De hecho, la transición comienza con la aceptación de la realización de un referéndum sobre el gas y de la asamblea constituyente como parte de la agenda estatal. Se trata, en principio, de un reformismo político, no así económico; aunque la realización del referéndum llevaba a enfrentar una reforma de la regulación sobre la propiedad de los hidrocarburos. El reformismo neoliberal pensó luego incluso algunas políticas para apoyar la producción nacional, como el plan de “compro boliviano”.

El núcleo de este reformismo neoliberal tenía como programa aceptar y afrontar la demanda generalizada de un referéndum sobre el gas sin que esto significara sustituir el modelo de privatización transnacional del sector. Por otra parte, esta situación de demanda de reforma del régimen de contribución fiscal le posibilitaba al gobierno enfrentar otra situación sumamente crítica: su déficit fiscal y las crecientes dificultades para financiar el funcionamiento normal de la administración estatal. Así, la demanda social le permitía al ejecutivo oponer ante las transnacionales una reforma que ampliara el margen de ingresos del tesoro nacional.

En este contexto, el gobierno de Mesa se organizó sobre dos ejes políticos. Uno fue la política en relación a Chile, aprovechando la ola contra la exportación del gas a través de ese país como un eje de articulación de su apoyo político. El otro eje, que ocupó un lugar central, fue la cuestión del gas, en torno a la cual se jugó su gobierno y su poder político. A lo largo de todo este prolongado proceso de discusión sobre la reforma de la ley del gas se organizó la subordinación de la realización del referéndum y de las

“La victoria popular sobre Sánchez de Lozada produce la transición a la faceta reformista del neoliberalismo. De hecho, la transición comienza con la aceptación de la realización de un referéndum sobre el gas y de la asamblea constituyente”

preguntas que el mismo contemplaría a la formulación que asumían las alternativas de ley de hidrocarburos preparadas por el ejecutivo, en constante consulta con las empresas petroleras. La primera operación consistió en transformar la demanda de referéndum sobre la nacionalización del gas en una consulta sobre el control del 50% de las regalías, posición compartida por el Movimiento al Socialismo (MAS) por un buen tiempo. La segunda operación, posterior al referéndum, fue transformar el masivo apoyo a esa dirigida opción por el 50% de regalías, en una versión de ley que no cumplía con los resultados mismos de la consulta. Así, las propuestas de ley elaboradas por el ejecutivo significaban un retroceso en relación a la respuesta a las preguntas que el mismo poder estatal había hecho en el referéndum. Se podría decir que Carlos Mesa se jugó por las petroleras –y por el tipo de apoyo político y económico que estas gestionan a través de los organismos internacionales de regulación económica y política mundial– pero lo hizo en un campo político o de fuerzas que le ofrecía una frágil base social para su gobierno.

La relación de fuerzas

En este sentido, el gobierno de Carlos Mesa encarnaba la continuidad del modelo económico neoliberal, sólo que en una situación de fragmentación de fuerzas en el seno del bloque político que había implantado y gobernado este modelo por veinte años. En el marco de esta fragmentación, una de las divisiones se dio en relación a los principales partidos de la coalición de gobierno de Sánchez de Lozada, que ya no estaban incluidos en el gabinete. Esto hizo que uno de los ejes de la confrontación y la lucha política se situara entre el ejecutivo y la parte del legislativo controlada por los partidos expulsados del gobierno.

En este contexto, el principal problema que tuvo que enfrentar Mesa fue llevar adelante la reforma a la ley de hidrocarburos, reduciendo el alcance de los resultados del referéndum y respondiendo a los intereses de las transnacionales petroleras, pero sin contar con el apoyo decidido de los partidos políticos y en un clima de constante desconfianza por parte de varias fracciones de la burguesía boliviana, en particular de la oriental.

El principal apoyo a esta fase de transición y a la realización del referéndum fue el MAS, aun sin estar en el gobierno. En todo este período el MAS ha sido, tal vez, el único partido político que ha defendido la continuidad del régimen de democracia representativa en el país, junto a la mayoría de las organizaciones populares, como se vio en la coyuntura de junio de 2005.

Hacia fuera del país suele parecer que fueron los movimientos sociales los que derrocaron al presidente Mesa. Sin embargo, considero que las fuerzas que se movieron contra

él, lo boicotearon y conspiraron durante meses fueron los partidos políticos desplazados del gobierno y la burguesía cruceña en particular. Por contrapartida, las organizaciones populares, incluido el MAS, comenzaron a movilizarse en demanda de que se cumplieran, por lo menos, los resultados de la consulta del referéndum sobre el gas –en el proceso de reforma de la ley de hidrocarburos y la realización de la asamblea constituyente–; es decir, que el presidente cumpliera los compromisos adquiridos en el momento de la transición.

Para explicar mejor este proceso cabe retroceder un poco para establecer algunos hitos que organizan el conflicto en la coyuntura de crisis de junio del presente año. Frente a la demanda del referéndum sobre el gas y de convocatoria a una asamblea constituyente –que es el programa del campo nacional-popular y que llevó a la crisis y derrota de Sánchez de Lozada– las oligarquías del oriente y sur del país articularon la consigna de las autonomías regionales o departamentales para contrarrestar la demanda de una decisión a nivel nacional sobre el destino de los hidrocarburos y el proceso de reforma de la constitución política del país. El programa de las autonomías forma parte de una estrategia defensiva de las oligarquías bolivianas, que han visto durante los últimos años un proceso de ascenso de fuerzas campesinas y populares en los espacios de las instituciones liberales, en particular los municipios y el sistema de partidos, y que tendencialmente ha creado las condiciones para que puedan disputar el ejecutivo en las próximas elecciones. Ante la posibilidad de un legislativo con mayorías indias y populares y un ejecutivo ganado por estas fuerzas a nivel nacional, las oligarquías han lanzado su programa contrainsurgente de autonomías departamentales para poder controlar las regalías de la explotación de los hidrocarburos, ya que los departamentos en los que se han descubierto más reservas e, históricamente, se explotan los hidrocarburos son aquellos en los que todavía hay un control más patrimonial de la tierra y la vida social.

La primera gran oposición a Mesa fue la de estas oligarquías que trataron de boicotear la realización del referéndum. Estas oligarquías aprovecharon la decisión de alza del precio de la gasolina para lanzar una nueva ofensiva contra Mesa a inicios de 2005. La salida de esa coyuntura de crisis fue el compromiso de realización de elecciones de prefectos y de un referéndum sobre autonomías departamentales antes de la convocatoria a asamblea constituyente. Es decir, a inicios del año 2005, Mesa aceptó el programa político oligárquico y, con ello –considero– firmó el fin de su gobierno; era, a partir de allí, cuestión de poco tiempo el que las oligarquías partidarias y departamentales lo desplazaran del ejecutivo.

La ola de movilizaciones que comienza en mayo fue una reacción y ofensiva contra una ley de hidrocarburos que ni siquiera cumplía la imposición del 50% de regalías; y también contra el programa de realizar un referéndum sobre autonomías antes de la asamblea constituyente. En este sentido, estas movilizaciones fueron como la reactivación del

programa de octubre de 2003, ante un cambio explícito en la dirección del ejecutivo que seguía las presiones de las oligarquías locales y transnacionales. La consigna de nacionalización se renovó, se generalizó a través del país y de los sectores sociales, y se radicalizó frente al retroceso producido en y desde el ejecutivo y el legislativo, que acabó aprobando una ley similar a la anteriormente vigente.

En este proceso, la ola de movilizaciones que se despliega de mayo a junio tiene una primera fase que persigue como objetivo presionar sobre el ejecutivo y el legislativo a favor de una ley de hidrocarburos que nacionalice el gas, demandando una inmediata convocatoria a la asamblea constituyente. Como el ejecutivo no estaba dispuesto a modificar la orientación de su posición en relación al gas, la coyuntura se volvió crítica. Sobre esta ola de movilizaciones populares se monta, por detrás, la conspiración de los partidos políticos y de las oligarquías locales para desplazar a Mesa del ejecutivo. En este sentido, el interés de las oligarquías partidarias y económicas se logra con la movilización de las fuerzas populares que perseguían otros objetivos.

Una vez que el presidente Mesa renuncia, después de haber emitido un decreto de convocatoria a la asamblea constituyente que ya no tuvo efecto político alguno —a no ser el de trasladar la responsabilidad al parlamento— la disputa y el conflicto se desplazan en torno a las decisiones sobre la sucesión presidencial, que es lo que estaban impulsando y esperando el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en particular, ya que la presidencia y vicepresidencia del parlamento estaban a cargo de estos partidos respectivamente y, según la Constitución, uno de los dos debía asumir el ejecutivo.

La segunda ola de movilizaciones populares se despliega justamente contra la posibilidad de que uno de estos dos partidos asuma la presidencia del país, para evitar que estos vuelvan a ser gobierno. En la persona de Hormando Vaca Díez (que ocupaba la presidencia del parlamento) se resumía a la vez toda la negatividad acumulada por la historia reciente de los partidos gobernantes del neoliberalismo y el programa de la oligarquía cruceña. En este sentido, las movilizaciones contra Vaca Díez y Cossío eran movilizaciones contra los partidos políticos y contra el programa de la autonomía oligárquica. A esto habría que añadir el tercer eje de resistencia, y que refería a que estos partidos representaban también el poder de las transnacionales y el de la embajada de Norteamérica. En este sentido, se podría decir que esta segunda ola de movilizaciones es antiimperialista, antioligárquica (como la primera ola) y anti-partidos.

El intento del MNR y el MIR de hacerse de nuevo con el ejecutivo generó así una dinámica de expansión de la resistencia, en un proceso de nacionalización de las movilizaciones, bloqueos y huelgas contra una sucesión presidencial que los beneficiaba y que

significaba el regreso de la coalición vencida junto a Sánchez de Lozada. Por contraparte, este programa político de un nuevo gobierno del MNR y el MIR fue apoyado por la oligarquía cruceña a través del Comité Cívico de Santa Cruz y las confederaciones empresariales. En este sentido, su derrota también fue una derrota del programa y las fuerzas autonomistas de Santa Cruz.

Este intento de sucesión presidencial promovido por el MIR y el MNR –con el apoyo norteamericano– generó una de las movilizaciones más grandes en la historia contemporánea de Bolivia. Por varias semanas diferentes fuerzas y organizaciones campesinas bloquearon el campo y diariamente atravesaban las ciudades con marchas y luchas callejeras. Así también, en esta segunda ola, empiezan a plegarse algunas organizaciones urbanas, en particular las juntas de vecinos, que en el caso de la ciudad de El Alto habían estado movilizadas desde un inicio. El intento de Vaca Díez había generado una indignación general y, por tanto, una movilización general.

Se podría decir que la movilización de este conjunto de fuerzas contra las privatizaciones del agua y de los recursos naturales y por una reforma global del estado boliviano –que empieza con demandas específicas o puntuales– cuando se generaliza y se produce la crisis del gobierno y su posible caída –frente a la cual se despliegan las estrategias de reacción autoritaria y militarización– se vuelven básicamente defensoras de la democracia y de las libertades políticas. Mientras las organizaciones partidarias y civiles que han propiciado el neoliberalismo en el país han estado dispuestas a abandonar las instituciones políticas liberales; las fuerzas que las han defendido son más bien organizaciones campesinas que no tienen una mentalidad liberal pero que constituyen hoy la base social de la democracia política en el país.

Para terminar, quiero justificar el título de este breve escrito. La primera derrota del neoliberalismo ocurrió en la Guerra del Agua, en abril de 2000, contra la privatización transnacional de dicho recurso en Cochabamba. La segunda derrota se dio en febrero de 2002 contra el intento del alza de impuestos al 25%. La tercera derrota la sufrieron Sánchez de Lozada y su proyecto de exportación del gas bajo control transnacional, y la cuarta se dio en junio de 2005. Sin embargo, estos procesos no implican que el neoliberalismo no siga organizando actualmente la estructura y política económica en Bolivia, así como el conjunto de las instituciones políticas del estado; habría que pensar, en realidad, que se trata de una guerra de posiciones contra el neoliberalismo, que tiene fecha su próxima batalla para diciembre de 2005 en las elecciones generales.